

El delito de ser pobres

A caballo de la inseguridad viene galopando el autoritarismo. Algunos hechos delictivos producidos en Buenos Aires han sido magnificados por algunos poderosos medios de prensa, instalando una sensación nacional de inseguridad. Y esto no significa negar la existencia de delitos. Sólo que se atemoriza a la población en una sola dirección. Conciente o inconcientemente el mensaje es que los delincuentes son los pobres. Y con ello se esconde una compleja trama de intereses: Están los que buscan torcer la política de mano blanda del gobierno nacional, que ha prohibido a la policía el uso de armas de fuego ante las manifestaciones callejeras. Están los sectores policiales de Buenos Aires que han sido desplazados y que fomentan o participan de hechos, como los secuestros, para instalar el clima de inseguridad. Están los sectores políticos conservadores con los grupos empresarios que quisieran un estado policial fuerte para terminar con el reclamo de los desocupados y preservar sus bienes con más seguridad. Están las empresas privadas de seguridad, cuyos propietarios son ex miembros de las Fuerzas Armadas o Policiales, que necesitan justificar y mantener sus negocios. Están las consultoras comerciales, como el Manhattan Institute de EE.UU. que junto a la Fundación Blumberg, quieren hacer negocios asesorando sobre tolerancia cero y vendiendo armas para tal fin. Y están los que apuestan a la inestabilidad institucional para que vuelva un poder político que, como el menemismo, les garantice impunidad y corrupción. No faltan sectores que levantan banderas populares pero con una política que es funcional al autoritarismo.

Apenas apareció en escena el señor Blumberg, luego del doloroso, lamentable y repudiable asesinato de su hijo Axel por parte de sus secuestradores, la sociedad porteña fue movilizada por conocidos periodistas, sospechándose de las reales motivaciones que animaban y animan a ciertos sectores disconformes por algunas políticas rela-

cionadas a los derechos humanos del presidente Kirchner. Los cambios en la Suprema Corte de Justicia, la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los avances en los juicios por las violaciones a los derechos humanos que llevaron a la cárcel a algunos militares genocidas expresaron una voluntad de avanzar contra la impunidad. Y, si esto se profundiza, alcanzará a los grandes empresarios que colaboraron abriendo las puertas de sus fábricas a las fuerzas represivas, prestando sus instalaciones para campos de tortura y aportando recursos económicos para el secuestro, asesinato o desaparición de trabajadores, sindicalistas, sacerdotes o estudiantes. ¿Dónde estaba Blumberg que no acompañó a las Madres de Plaza de Mayo en su ronda de los jueves cuando reclamaban la aparición con vida de los secuestrados?

Tan degradada pareciera estar nuestra sociedad que el dilema de la seguridad ha quedado reducido al límite de la vida o la muerte. ¿Nada avanzó la sociedad en su historia? Más bien pareciera haber retrocedido. Y cabe preguntarse por los actores sociales responsables de esta degradación. Durante la dictadura militar la vida fue menospreciada, desaparecida y eliminada con la implantación del terrorismo de estado, mientras el gran empresariado hacía sus negocios. Si desde el estado se pudo hacer eso y se gozó de impunidad, ¿qué podría esperarse de los comportamientos sociales? Si las Fuerzas Armadas y Policiales saquearon viviendas, vendieron muebles, se quedaron con propiedades y se apoderaron de los niños recién nacidos, sin juicios ni condenas, es en ese espejo de ética y moral donde se mira parte de la sociedad para continuar con el delito.

Si además, ya en democracia, se podía vivir sin trabajar, según el inefable sindicalista Luis Barriónuevo, haciendo apología de la corrupción, y se asistía al festín del enriquecimiento apresurado y desmedido de dirigentes y empresarios, que lue-



Graciela Sacco. "Bocanada". Interferencia urbana. Rosario. 1994.

go vaciaban empresas dejando en la calle a sus trabajadores y huían a los paraísos fiscales, ¿cuál es la cultura del trabajo y cuáles los valores referenciales para transmitir desde los medios de comunicación o desde las escuelas?

¿Dónde estaba Blumberg cuando en el apogeo del neoliberalismo sucedían estas cosas? ¿Cuántos empleos generaron estos empresarios para combatir la degradación social que acarreo la cultura neoliberal del sálvese quien pueda?

Es hora de ir a las causas, para no llorar los efectos. No puede hablarse de la seguridad sin atender el contexto social. Hoy se habla de seguridad reduciéndola a la represión de algunos delitos con resonancia pública.

En una saludable nostalgia del pasado, deberíamos volver a las épocas en que hablar de seguridad era hablar seguridad social, como dice la Constitución Nacional; que tiene que ver con el derecho al trabajo, al salario, a las jubilaciones y pensiones móviles, a la protección integral a la familia, a la salud, la educación, la vivienda digna... Pero se quiere instalar que los responsables de la inseguridad son los desocupados, los jóvenes, los pobres. Contra ellos hay que arremeter. Como

si se tratara de un mal que hay que extirpar del cuerpo social. Un mal que vino solo, que no reconoce ninguna causa y del cual nadie se hace cargo. Es más fácil criminalizar a los pobres. Y por partida doble. Como lo profundiza en Córdoba el modelo neoliberal del gobernador De la Sota. Porque además de seguir excluidos en la distribución de la riqueza, se los sanciona sacándolos de la escena, reclusivos como escoria en cárceles o institutos de menores, sin políticas de reinserción. Con ello se les niega existencia social. No existen, no son mostrables. Hay que ocultarlos si no se los puede hacer desaparecer. O apelando a métodos más "sociales" como el de recluirllos en gigantescas y precarias "ciudades" especiales en las periferias urbanas, concentrándolos para un mejor control represivo, sin alternativas laborales. Para este modelo hablar de seguridad es hablar de represión, armas, móviles policiales, baja de la edad de imputabilidad a los menores, cárceles, murallas, etc...

Es necesario diferenciar seguridad de represión al delito. La seguridad tiene que ver con la vida y en abundancia para todos. La represión al delito es el instrumento establecido por la sociedad para los violadores de los derechos. Pero todos los delitos y todos los derechos...



Graciela Sacco. "Bocanada". Interferencia urbana. Rosario. 1994.

Cometieron delitos los empresarios, los militares, los obispos, los gobernantes, los políticos y sindicalistas que se enriquecieron al calor del modelo neoliberal, sin olvidar a jueces y comisarios, que tejieron sus propias redes delictuales. Entre 1999 y 2003 se sancionaron nueve leyes aumentando las penas por diversos delitos, pero se rebajó la de subversión económica, para beneficiar a los que se robaron los dólares y las riquezas de los argentinos en los últimos años. Ninguno de ellos fue castigado. La impunidad se extendió como cultura. Cualquier ley podía ser violada, porque se estaba seguro de que la justicia no llegaría. Y esta ostentación de impunidad, extendida por los principales medios de comunicación que hoy agitan nuevos fantasmas, penetró en toda la sociedad.

No lo escuchamos a Blumberg pronunciarse sobre estos temas. No nos informó cuántos despidos produjeron los empresarios en estos años. Salvo la propuesta de hacer trabajar a los presos por dos pesos, no conocimos la coordinación del esfuerzo empresario para generar empleo, como forma de colaborar para que haya seguridad para todos. Tampoco conocimos propuesta alguna para combatir la impunidad que sustenta esa sensación de inseguridad que aflige a buena parte de la sociedad.

Los sectores excluidos desde hace años por las políticas neoliberales hace mucho que sufren la inseguridad. Sus derechos, aunque consagrados en la Constitución y las leyes, permanecen violados. Y el resto de la sociedad sigue mirando hacia adentro, tapándose los ojos para no ver la realidad que la rodea. Es preferible seguir entretenidos o adormecidos por Tinelli o los reality shows. Es preferible construir murallas refugian-

dose en los countries o alambrar barrios, antes que generar instancias de diálogo e inclusión social. Es preferible preparar las trincheras para la guerra, convencidos que el mayor poderío económico y bélico permitirá arrasar con los inadaptados o los "nuevos terroristas urbanos", que son los niños de la calle, limpiavidrios y trabajadoras sexuales, según ha dicho en Córdoba el vocero de los Manhattan boys, de esa consultora comercial norteamericana de seguridad contratada por el gobernador De la Sota para instalar la tolerancia cero, por gestión del señor Blumberg.

Hablar de seguridad es hablar de inclusión social. Y esto exige políticas de estado en la generación de empleo, en la redistribución de la riqueza, en la educación, en el cuidado de la minoridad, en la previsión y en la prevención social, en la garantía de los derechos humanos.

Hablar de represión al delito es hablar de formación y capacitación de las fuerzas policiales, es elaborar políticas preventivas, es establecer canales de contención social con participación de todos los sectores afectados, es generar o restablecer la confianza de la sociedad sobre las instituciones judiciales y policiales, combatiendo la corrupción y la impunidad.

No hay soluciones mágicas ni existen los mesías de la seguridad. Se avanzará en el debate abierto y plural que logre definir políticas consensuadas e incluyentes, consolidando la necesaria democratización social, cultural, económica y política.

Córdoba, 26 de octubre de 2004
Luis Miguel Baronetto
Director de Derechos Humanos
Municipalidad de Córdoba